

# ¿POR QUÉ EL EMPERADOR NECESITA LA *YAKUZA*? PROLEGÓMENOS A UNA TEORÍA MARXISTA DEL ESTADO JAPONÉS

El 5 de junio de 1999 el nuevo director de un instituto de enseñanza media en Osaka era apuñalado y herido de gravedad por la mafia japonesa, la *yakuza*. Se había negado a izar la *hinomaru* –bandera del Sol Naciente– y a permitir que se cantara el himno *kimigayo* («Que el Emperador gobierne para siempre») durante la ceremonia de graduación. En febrero, el director de un instituto cercano a Hiroshima era presionado hasta el punto de suicidarse; las presiones en conflicto ejercidas desde el Ministerio de Educación, al ordenar el uso del himno y de la bandera, y de los profesores a su cargo, que le instaron a mantenerse firme, resultaron insoportables. En 1989 se hizo obligatorio rendir respeto a los símbolos nacionales en las escuelas japonesas, si bien estas medidas sólo se han aplicado seriamente en los últimos dos años. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué un desacuerdo cultural sin importancia ha desatado una controversia política tan importante con consecuencias tremendas, incluso fatales, para algunos de sus participantes?

Se trata de una controversia curiosa, puesto que mientras que aquellos que se oponen al uso obligatorio de la bandera y del himno no han dudado en exponer sus razones –sobre todo, la relación de estas medidas con el militarismo y el imperialismo anterior a 1945–, el gobierno, a pesar de reaccionar ante la mayoría de las críticas, ha permanecido curiosamente silencioso sobre los motivos que le han impulsado desde el primer momento a desencadenar esta crisis. ¿Qué esperaba lograr? ¿Por qué ha concedido tanta importancia a este hecho? ¿Y por qué *ahora*? El carácter unilateral de este intercambio, y su estilo extremadamente acalorado, ha provocado que muchos observadores extranjeros lo hayan achacado al exotismo japonés. Sin embargo, los misterios, incluidos los japoneses, tienen explicaciones. La presente tentativa de desentrañar este misterio político aspira a establecer una explicación de las acciones del gobierno de acuerdo con un análisis marxista de las múltiples exigencias del Estado capitalista japonés.

## II

Nunca ha resultado sencillo comprender el Estado japonés. En el siglo XIII, por ejemplo, Japón estaba gobernado por un emperador que, en realidad, servía de marioneta a un emperador retirado y a sus cortesanos, que a su vez ejecutaban las órdenes de un *shōgun* o dictador militar, que estaba absolutamente bajo el control de su regente. Incluso hoy, el juego de espejos continúa distorsionando la posibilidad de realizar un examen empírico de primera mano. ¿Puede la teoría marxista del Estado ayudar a dilucidar lo que uno de los mejores libros sobre esta cuestión ha formulado de modo esquivo como el «enigma» del poder japonés?<sup>1</sup>

La típica crítica marxista del Estado en las democracias capitalistas resta importancia al papel del funcionariado, y trata al gobierno como el principal instrumento de la clase capitalista. En términos generales, sólo considera como partes del Estado a las instituciones abiertamente políticas, y ve en las formulaciones y prácticas democráticas, tales como las constituciones y las elecciones libres, las fuentes fundamentales de legitimación. Esta aproximación se adecua bastante bien a la mayoría de las democracias capitalistas; no obstante, en el caso de Japón resulta enormemente inadecuada en cinco aspectos importantes. En primer lugar, el gobierno electo en Japón es sumamente débil. En segundo lugar, el funcionariado estatal que ocupa los puestos más elevados domina tanto al gobierno electo como al sector corporativo. En tercer lugar, un gran número de altos cargos en el gobierno y en las empresas son detentados por funcionarios retirados. En cuarto lugar, muchas funciones político-estatales fundamentales son realizadas por lo que aparentan ser organismos no estatales; y finalmente, el agente principal de legitimación del Estado, por su forma y por sus acciones, es el sistema del emperador, un residuo del pasado feudal de Japón.

No existe controversia alguna sobre el primer punto, a pesar de que la debilidad del gobierno electo no deje de sorprender en un primer momento. Tal y como advirtió Walter Mondale poco después de asumir su cargo como embajador de Estados Unidos en Japón, «cuando ves a los funcionarios tomando parte también en los debates, contestando preguntas, preparando enmiendas y presupuestos en el órgano legislativo te das cuenta de que ésta es una sociedad en la que la fracción elegida públicamente es muy reducida»<sup>2</sup>. Mondale, en su cargo como senador de Estados Unidos, había contado con un personal compuesto por cincuenta personas que le proporcionaba la información y el conocimiento necesario para ser un legislador eficaz; un miembro de la cámara de representantes tendría a su disposición a unas veinticinco personas. Su equivalente en Japón cuenta con una o dos personas, y los ministros del gobierno sólo disponen de unas cuantas más. Donde un presidente estadounidense

<sup>1</sup> Karel VAN WOLFEREN, *The Enigma of the Japanese Power*, Tokio, 1993.

<sup>2</sup> *New York Times Magazine*, 5 de noviembre de 1995, p. 37.

se recién elegido nombra varios cientos de funcionarios en puestos elevados que le serán fieles, un primer ministro japonés recién elegido nombra unas cuantas docenas. Careciendo de los medios necesarios para tomar decisiones de peso, no cabe sorprenderse de que las reuniones semanales del gobierno apenas duren quince minutos y consistan fundamentalmente en sellar lo que los funcionarios ya han decretado. Desde 1955, únicamente ha habido una ocasión en la que el órgano legislativo enmendara el presupuesto presentado por la administración; por otro lado, la rapidez con la que cambia el primer ministro (un promedio de uno cada dos años; el resto de los ministros cambian una vez al año) contribuye asimismo a que el gobierno electo sea más sombra que sustancia. En la crisis que siguió a la apoplejía del primer Ministro Obuchi Keizo a principios de abril de 2000, fue un funcionario, el secretario de Estado Aoki Mikio, como primer ministro en funciones, quien subsanó la fractura que se había generado, y quien aparentemente jugó un papel decisivo en la elección de Mori Yoshiro como sucesor.

En el pasado, cuando impartía cursos sobre la Unión Soviética, dedicaba un mes entero al Partido Comunista y únicamente una semana al Soviet Supremo y al Consejo de Ministros (que hubieran merecido incluso menos tiempo). El caso de Japón no es tan diferente, aunque aquí la fuente última de poder es el alto funcionariado estatal: los escalafones superiores del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Comercio e Industria (MCI) y del Banco Estatal. Algunos han cuestionado que esto pueda ser así argumentando que la administración en Japón es la mitad de su contraparte en otros países capitalistas occidentales, pero esto únicamente pone de manifiesto que su poder está más concentrado, menos constreñido por impedimentos y equilibrios de distinto tipo. El *zaito* del Ministerio de Hacienda –un fondo separado, compuesto por las cuentas de ahorro postal y los activos de las pensiones públicas–, por ejemplo, representa dos tercios del total del presupuesto oficial del gobierno, y se emplea únicamente según los dictados del Ministerio.

La siguiente comparación puede resultar ilustrativa: los funcionarios japoneses no son consejeros oficiales de los altos cargos políticos, no se mueven libremente entre la administración y la política, o se presentan a las elecciones mientras conservan sus puestos, tal y como sucede en Francia. No se sientan en el Parlamento, como es el caso en Alemania, o prestan servicios en comisiones presidenciales, como ocurre en Estados Unidos. Los funcionarios dirigentes en Japón no necesitan hacer estas cosas para influir al gobierno porque, de hecho, ellos son el gobierno.

### III

El bozal que imponen los funcionarios a los políticos va acompañado del dominio que ejercen sobre la comunidad empresarial. El alto grado de interdependencia entre las actividades privadas y las gubernamentales en

Japón es de sobra conocido. Sin embargo, el papel del funcionariado va más allá de facilitar la legislación, el capital y el conocimiento necesarios; éste opera como el brazo ejecutivo de la clase capitalista en su conjunto, desarrollando estrategias y estableciendo prioridades en todos los sectores de la economía. Son ellos, y no los propietarios de la industria o sus enormemente reputados directivos y empleados, los últimos responsables de lo que Japón Inc. es hoy en día. En lugar de decirles a los empresarios lo que han de hacer, los ministros japoneses han perfeccionado la vieja táctica de la mafia que consiste en hacer una oferta irresistible; lo llaman «orientación administrativa». En el caso de que los empresarios individuales se muestren recalcitrantes, los funcionarios cuentan con una batería de medios, que van desde las nuevas leyes y regulaciones de licencias, subsidios, préstamos y beneficios concernientes a los impuestos, hasta la imposición de obediencia; aunque habitualmente no es necesario cumplir semejantes amenazas. De hecho, posiblemente existen menos conflictos entre los ministerios y el mundo empresarial que entre los distintos sectores de la Administración. Parte del enigma, por lo tanto, se refiere a por qué los capitalistas cooperan con el Estado en tan alto grado. Algunos han sugerido que la Administración superior en otros países capitalistas –Francia, por ejemplo– ejerce un poder similar sobre los sectores privados; no obstante, admitir esto supone obviar una diferencia significativa que se refiere tanto al tipo como al grado. Con el gobierno electo eficazmente neutralizado, los altos funcionarios japoneses sencillamente carecen de rivales como agentes y estrategas en la dirección económica del país.

Esta aquiescencia de los empresarios japoneses a la «orientación administrativa» se remonta a los orígenes del capitalismo en Japón. La facción de los *samurai* en los escalafones inferiores que llegaron al poder con la Restauración Meiji de 1868 estableció negocios monopolistas rentables, que después vendieron por una miseria a unos cuantos privilegiados, pertenecientes por regla general a sus propios clanes. Fue la privatización más que la acumulación capitalista lo que proporcionó a Japón sus primeros *zaibatsus*, o imperios empresariales. En Europa occidental –en términos generales–, los capitalistas llegaron antes que el capitalismo que a su vez precedió al Estado capitalista. En Japón se invirtió este proceso. Apresurándose a alcanzar los logros tecnológicos y militares de los despóticos extranjeros que habían forzado a Japón a abrir sus puertos al comercio, el nuevo Estado más bien creó a los capitalistas tal y como en Europa el Estado feudal había creado a los barones y a los caballeros<sup>3</sup>. El Estado japonés, justo desde sus comienzos, hizo todo lo posible para proteger su emergencia económica y para asegurar su prosperidad y crecimiento. ¿Cómo podían los empresarios negarse a «cooperar»? La hostilidad del ambiente comercial internacional en el que estaban operando los tar-

<sup>3</sup> Aunque poco habitual, este proceso no fue único. Engels, por ejemplo, habla de cómo el Estado ruso de su tiempo «alimentaba» a una clase capitalista. Citado en Pranab BARDHAN, *The Political Economy of Development in India*, Oxford 1984, p. 35.

díos capitalistas japoneses y su creciente dependencia del abastecimiento extranjero de materias primas, vino a fortalecer un enfoque de «equipo» para resolver las dificultades económicas y la confianza en el liderazgo estratégico del Estado. Como si esto no fuera suficiente para asegurarse la sumisión (prefieren llamarlo el «consenso») de las empresas, los ministerios juegan así mismo un papel clave en las promociones del más alto nivel en el sector privado. Son muchos los bancos que acuden al MÍC con una breve lista de candidatos de los cuales este último elegirá a su director general.

Se han producido intentos esporádicos, especialmente en los últimos años, a cargo de los primeros ministros y de los propietarios de las grandes corporaciones de reducir esta dependencia; sin embargo, poco parece haber cambiado. El control ininterrumpido del funcionariado sobre la vida económica y política de Japón constituye una cuestión teórica de primer orden en lo que respecta a las relaciones entre los funcionarios superiores, los dirigentes de corporaciones y bancos, y los dirigentes en el gobierno. No se trata de un problema empírico, dado que los hechos principales, tal y como he explicado, son de sobra conocidos. Se trata, por el contrario, de un problema conceptual. Si el funcionariado realmente domina a los otros dos grupos, ¿en qué sentido podemos hablar de clase capitalista dirigente? Y si los capitalistas no dirigen, ¿en qué sentido podemos hablar de capitalismo?

#### IV

Otro hecho de sobra conocido sugiere una respuesta. Tras retirarse –normalmente en torno a los 55 años de edad–, un gran número de funcionarios de alto nivel ocupan elevados puestos en las empresas, y en menor medida, en la política. En Japón, donde la gente se mantiene en activo hasta una edad bastante avanzada, esto les da otros veinte años más o menos para desarrollar sus nuevas carreras. Éste es el tercer rasgo principal que diferencia a Japón, posiblemente con la excepción de Francia, del resto del mundo capitalista. Esta práctica está tan extendida que los japoneses tienen una palabra específica para ella: *amakudari*, o «caído del cielo» (aunque el aterrizaje –que nadie se alarme– es invariablemente muy suave). Hoy en día, existen varios miles de ex funcionarios en los escalafones superiores que trabajan como presidentes, responsables, directivos y gestores de compañías, bancos, asociaciones comerciales y corporaciones públicas, habitualmente en el mismo campo en el que trabajaron anteriormente como agentes del Estado<sup>4</sup>. Ésta es la elite de la comunidad

---

<sup>4</sup> El hecho de que los bancos y corporaciones más grandes empleen menos ex funcionarios que sus competidoras de tamaño medio, que necesitan una influencia extra para lograr la igualdad en las relaciones con el ministerio gobernante, no invalida el argumento general respecto a la extensión de la práctica del *amakudari*, o el papel que le he atribuido. Para las cifras relevantes, véase Kent E. CALDER, «Elites in an Equalizing Role», *Comparative Politics* (julio de 1989), pp. 383 ss.

empresarial japonesa. En Estados Unidos, el Departamento de Defensa posiblemente tenga el récord de emplear a funcionarios retirados en el sector privado, no obstante, su papel principal es obtener contratos del gobierno para su nuevo empleador; son pocas las veces en que el empresario en ciernes se convierte en un director general.

Para apreciar la importancia de esta diferencia, deberíamos añadir que los gestores y directores de las corporaciones japonesas tienen considerablemente más poder en relación a sus accionistas que sus contrapartes estadounidenses. Esto ocurre dada la enorme cantidad de acciones que las corporaciones japonesas comparten entre sí y dado que presentan un ratio capital social/endeudamiento mucho menor (lo que les hace, por lo tanto, que sean menos dependientes para su capitalización de las ofertas públicas) que las compañías estadounidenses. La influencia de las elites funcionariales sobre las corporaciones se encuentra, así pues, menos constreñida por las fuerzas del mercado en Japón que en Estados Unidos. Es probable que el gestor de la corporación, máximo responsable de dirigir la «orientación administrativa» sea él mismo un antiguo funcionario, a menudo justamente del mismo ministerio que ahora le «orienta». La situación en el terreno político tan sólo es ligeramente menos incestuosa: la mayoría de los primeros ministros y del resto de los ministros del gobierno japonés elegidos después de la Segunda Guerra Mundial han llegado a la política por la ruta funcional (si bien el número de excepciones ha aumentado algo desde 1980). También aquí, y a excepción de Francia, nada de esto existe en ningún otro lugar del mundo en una proporción semejante.

Un efecto fundamental del *amakudari* es que la mayoría de los funcionarios dirigentes en Japón se benefician directa y personalmente, cuando no inmediatamente, del éxito del capitalismo japonés. El carácter extendido y sistemático de este cambio de carrera en la mitad de la vida significa que ellos también saben que la decisión que toman como trabajadores en la Administración determinará su futuro «traspaso» al sector privado y la fortuna que lo acompaña. En un lugar en el que la transición de funcionario estatal a capitalista está determinada con anterioridad, los intereses de los capitalistas se convierten asimismo en los intereses de los funcionarios. En este sentido, conociendo la trayectoria de los actuales funcionarios en los niveles superiores, los empresarios pueden tener la certeza de que las decisiones tomadas en el sector estatal los beneficiarán<sup>5</sup>.

## V

Si tantos capitalistas dirigentes en Japón son antiguos funcionarios, y la mayoría de los funcionarios dirigentes se convertirán en futuros capitalis-

---

<sup>5</sup> Karel van Wolferen, *Enigma of Japanese Power*, cit., p. 146.

tas, resulta mucho más adecuado considerar a ambos miembros de la misma clase –únicamente separados por una división temporal del trabajo– en lugar de miembros de clases diferentes. El mismo razonamiento habría de extenderse a los ex funcionarios que en la actualidad forman parte del gobierno electo, y que también se benefician enormemente de la *larguesse* del negocio a gran escala. El acervo educativo común de estos tres grupos, sus frecuentes enlaces entre sí y el alto grado de socialización organizada (en «sociedades de amistad» que reúnen a los funcionarios públicos en la cúspide con sus predecesores retirados, la mayoría de los cuales detenta puestos directivos en el área equivalente en el sector privado), apuntan asimismo a esta identidad compartida. En 1993, por ejemplo, el 88 por 100 de la elite del Ministerio de Economía provenía de la Universidad de Tokio, principalmente de la Facultad de Derecho<sup>6</sup>.

Karel van Wolferen ha argumentado que los altos funcionarios, los empresarios y los políticos forman una única clase dirigente, que él denomina la «clase de los administradores»<sup>7</sup>. Aunque esta etiqueta pone de manifiesto el destacado papel que juega el funcionariado como incubadora de futuros políticos y capitalistas, difumina el modelo común inclinado hacia los negocios que emerge de las actividades de estas instituciones formalmente separadas, así como los intereses y propósitos compartidos subyacentes. Teniendo todo esto presente, un nombre más adecuado para estas personas sería el de «capitalistas»<sup>8</sup>. El evidente dominio estatal sobre la clase capitalista –a menudo citado como una de las razones que justifican la imposibilidad de aplicar el análisis marxista a Japón– adquiere un significado totalmente diferente cuando la divisoria entre clases se rearticula de este modo.

De acuerdo con Marx, los capitalistas son aquellos que encarnan y ejecutan los dictados del capital, entendido éste como un valor que se autoexpande, o como riqueza que se autorreproduce (frente a la riqueza que se emplea para satisfacer las necesidades, servir a Dios, extender el poder militar o civil, o acrecentar el *status* o la fama). Con el capital, la riqueza se torna hacia sí misma y se emplea únicamente en su propio crecimiento. Los que controlan la riqueza empleándola con este fin, y beneficián-

---

<sup>6</sup> La idea acerca de los supuestos «orígenes meritocráticos» del funcionariado se va a pique si pensamos en el alto coste de los buenos tutores empleados –desde el jardín de infancia en adelante– sin los cuales es prácticamente imposible entrar en la Universidad de Tokio.

<sup>7</sup> Karel van Wolferen, *Enigma of Japanese Power*, cit., p. 143.

<sup>8</sup> El problema de cómo caracterizar a la clase dirigente es, desde luego, parte de un problema mayor que se refiere a cómo caracterizar el sistema japonés en su conjunto. Bill Tabb proporciona una lista con algunas de las denominaciones más llamativas: «pluralismo autoritario», «capitalismo de desarrollo estatal», «*laissez-faire* orientado hacia el intervencionismo», «mercados planificados». William K. TABB, *The Post-War Japanese System*, Oxford, 1995, p. 14. Si tenemos en cuenta la posición privilegiada de la acumulación capitalista, y las relaciones de explotación entre los que poseen los medios más importantes de producción y los que trabajan en ellos, no veo ningún problema en etiquetar al sistema japonés como capitalista, lo cual no me impide reconocer sus numerosas cualidades específicas.

dose personalmente de este proceso (sean o no los propietarios legales de los medios de producción), pertenecen a la misma clase capitalista colectiva. En Japón, algunos capitalistas trabajan en lo que formalmente son instituciones estatales, mientras que otros lo hacen en instituciones formalmente privadas, si bien, tal y como he explicado anteriormente, la mayoría de los miembros dirigentes de esta clase dividen sus vidas entre ambas esferas. Lo fundamental es que todos funcionan como encarnaciones del capital, sirviendo a sus mejores intereses (y, en consecuencia, a los suyos propios) del modo en que se lo permita la posición que estén ocupando en cada momento.

Desde luego, otros países han contado con capitalistas que se convierten en empleados superiores de la Administración, en políticos destacados, o en ambas cosas a la vez, sin que esto implique en ningún momento dejar de ser capitalistas. El ejemplo más significativo es el de Nelson Rockefeller, que era un capitalista, un embajador y un vicepresidente. Sin embargo, la mayor parte de estas figuras, excepcionales en sus países, comienzan su carrera como propietarios de un patrimonio empresarial. En Japón, donde este modelo de carrera está más extendido, el patrimonio empresarial normalmente viene después. Las cualidades que distinguen a alguien como miembro de una clase determinada pueden, en último término, adquirirse con el transcurso del tiempo. La pertenencia de clase puede evolucionar como las propias clases. Se puede entrar a formar parte de ellas en distintas fases. En Japón, el proceso por el que alguien se convierte en capitalista comienza, para la mayoría, con la incorporación a los ministerios principales.

Sostener que los funcionarios superiores en Japón forman parte de la clase capitalista no significa, por lo tanto, que no podamos identificarlos como la parte de la clase que (en el momento actual) actúa en la Administración del Estado. Sin embargo, una vez aceptado este hecho, resulta posible establecer más claramente qué hacen en ella, por qué hacen lo que hacen, y por qué reciben el grado de conformidad que reciben tanto de parte de los dirigentes de las corporaciones como de los del gobierno. También podemos entender mejor por qué los capitalistas del sector privado realizan en algunos casos tareas administrativas –por ejemplo, Nomura Securities cuando redactó la legislación que estaba destinada a restringir su propia actuación– sin que se nos fundan los plomos mentales a la hora de entender lo público y lo privado. La frontera entre los capitalistas que se hallan dentro y fuera de la Administración pública no está tan clara o es tan rígida como las formas institucionales de poder nos inducen a pensar<sup>9</sup>. El objetivo del análisis de clase marxista no es produ-

---

<sup>9</sup> Aunque no se asemeja en modo alguno a la manera en que ha tenido lugar en Japón, este fenómeno también puede encontrarse en Estados Unidos: «muchos funcionarios locales y estatales se están implicando tan profundamente en las actividades empresariales que resulta difícil saber dónde acaba el gobierno y dónde comienza el negocio privado», *New York Times*, 9 de diciembre de 1985, p. 7.



cir un esquema clasificatorio ahistórico en el que nada ni nadie cambia, sino explicar las dinámicas y modos de operar reales del conjunto de las sociedades. Esto permite –incluso precisa– de una cierta flexibilidad a la hora de dibujar y redibujar las divisiones de clase. Para poder captar el carácter específico del capitalismo japonés, voy a argumentar que la noción de «clase capitalista» necesita extenderse de este modo.

Para el resto de la clase capitalista existen buenas razones para permitir que aquellos que en la actualidad están trabajando en los ministerios estatales tomen iniciativas en su nombre: los últimos cuentan con el conocimiento preciso, la mejor visión de conjunto y el enfoque más claro sobre cuáles son los intereses de la clase globalmente considerada. Su perspectiva no está comprometida por las necesidades de una corporación o una industria particular (tal y como sucede con los gestores y los directores) o de quienes pertenecen a un partido o una facción (como sucede con los líderes del gobierno). Libres de semejantes distracciones parciales y temporales, los funcionarios se encuentran en una posición privilegiada para servir a los intereses generales y a largo plazo del capital japonés, y para mediar cuando sea preciso entre las facciones rivales de la clase dirigente. (De este papel de mediación podría deducirse que el Estado es neutro, esto si uno no advirtiera que es siempre una facción de la misma clase la que se sitúa por encima de las otras.)

El Estado capitalista destaca por el hecho de encubrir su auténtico papel en beneficio de una única clase, y mientras esto ha sido demostrado una vez tras otra, esta conexión se muestra invariablemente como una novedad. Para no dejarla escapar, necesitamos desarrollar las categorías del pensamiento adecuadas y, para el caso peculiar de Japón, voy a proponer la categoría de «capitalista colectivo». Bajo esta perspectiva, Japón sigue siendo un *shōgunate*; sin embargo, en lugar de una figura militar, hoy el *shōgun* es el capitalista colectivo que divide su tiempo entre las funciones administrativas, las empresariales y la gubernamentales. Los *samurai* que hicieron la revolución Meiji deciden reinventarse a sí mismos como dirigentes capitalistas, en lugar de tomar simplemente el relevo de las fuerzas feudales, como sucedió tras otras revueltas exitosas anteriores. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, tuvieron que crear el capitalismo y una clase capitalista de la que poder formar parte. Su éxito a la hora de establecer esta nueva formación social e introducirse a sí mismos en el núcleo de la clase dirigente fue indudablemente una de las mayores proezas de ingeniería social de la historia de la humanidad. En la mayor parte de los aspectos fundamentales, y a pesar de todos los cambios que se produjeron tras la Segunda Guerra Mundial, Japón continúa operando dentro del molde fabricado por estos padres fundadores.

## VI

El cuarto rasgo fundamental que distingue a Japón de otras democracias capitalistas es el número de funciones político-estatales centrales ejercidas

por lo que aparentemente son organismos no estatales. Desde luego, esta práctica no se limita a Japón; sin embargo, es preciso dar cuenta de la escala e importancia de sus concreciones en este país. Para hacerlo, debemos primero comprender qué es lo que hacen los Estados. No basta saber que son los principales lugares en los que se asienta el poder político; también es necesario saber cómo y con qué propósito se emplea este poder. En todas las sociedades basadas en una división social del trabajo, la clase o conjunto de clases que controlan el plusvalor necesita la contribución de toda la sociedad para legitimar los medios por los que éste ha sido extraído, y reprimir a los que se oponen a este orden de cosas. La represión y la legitimación son, por lo tanto, tareas esenciales de todo Estado. Además de esto, la clase capitalista dirigente, dado el modo en que la riqueza es producida y distribuida en la presente época, precisa de otros dos tipos de asistencia. La primera tiene que ver con la acumulación de capital, e implica asegurar las condiciones –sociales, legales, etc.– que subyacen a la explotación de los trabajadores y a la producción de plusvalor, y crear oportunidades de inversión beneficiosas allí donde no existen. La segunda forma de contribución necesaria tiene que ver con la generación de valor, que depende de encontrar, establecer y defender los mercados para poder asegurar que lo que se produce se venderá. Éstas son las cuatro funciones centrales –represión, legitimación, acumulación y realización– que cualquier Estado capitalista necesita efectuar para que su clase capitalista dirigente pueda sobrevivir. La incapacidad de facilitarlas supondría que los capitalistas no podrían seguir reproduciendo las condiciones que hacen posible su propia existencia como clase.

Si éstas son, entonces, las funciones centrales del Estado en la sociedad capitalista, es posible considerar a cualquier órgano que ejecuta cualquiera de ellas como parte del mismo. El Estado, en esta concepción, es simplemente la suma de estos órganos; y si alguno de ellos se implica por ende en actividades que no son de carácter político, entonces cabe considerarlo tanto parte del Estado como de otra cosa. En definitiva, lo crucial en la teoría de Marx sobre el Estado no es esta o aquella cualidad de las instituciones políticas, o del poder con el que cuentan, o incluso la posición privilegiada de una clase con respecto a otras, sino más bien la relación que se establece entre todo esto en función de las exigencias del sistema social y económico específico en el que se ubica. El procedimiento se desplaza desde la totalidad hacia dentro. Por lo tanto, lo primero que se establece es la naturaleza de la totalidad.

Marx describe el Estado como «la expresión activa, consciente y oficial de la estructura actual de la sociedad»; y, en otro lugar, como «la forma de organización que los burgueses adoptan necesariamente tanto con fines internos como externos, para garantizar su propiedad y sus intereses»<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Karl MARX y Frederick ENGELS, *Collected Works*, Nueva York, 1975, vol. 3, p. 199; Karl MARX y Frederick ENGELS, *The German Ideology*, Parte I y III, Londres, 1938, p. 59.

El Estado puede ser considerado una dimensión de la totalidad –esto es, del capitalismo– aunque también como un aspecto de la clase capitalista, algo fabricado por dicha clase. Lo primero nos conduce al ámbito de la «lógica del capital» (que relaciona las estructuras con los procesos dentro de un conjunto históricamente específico); lo segundo, al ámbito de los intereses de la clase capitalista (que establece la ubicación de las personas y sus actividades dentro de estas estructuras). Juntos representan las vertientes objetiva y subjetiva de una misma relación compleja. Por consiguiente, lo que hace el Estado, así como las formas específicas mediante las cuales lo hace, están internamente relacionadas con lo que es la clase dominante y con lo que sus intereses convierten en necesario. Es éste el sentido en el que Marx considera que el Estado, sea cual sea su grado de contenido democrático, es una «dictadura» de la clase dominante en todas las sociedades de clases. Esto no debería entenderse de un modo instrumental –sugiriendo su arbitrariedad o una relación externa entre un Estado y su clase dirigente–, sino de un modo expresivo: el Estado es el conjunto de formas institucionales mediante las cuales una clase dirigente se relaciona con el resto de la sociedad, lo cual es parte de lo que significa dirigir para dicha clase. En otras palabras, se trata de un rasgo esencial de la propia clase.

Aproximarse a los componentes del Estado desde el punto de vista privilegiado de la totalidad nos permite contemplarlo más allá de su autorrepresentación ideológica. Nos permite comprender que en Japón no es el gobierno electo el que gobierna, que la democracia no otorga el poder a los ciudadanos, que los administradores no son meros administradores, y que las instituciones abiertamente políticas sólo realizan parte del trabajo político. También nos proporciona la flexibilidad necesaria para redibujar las fronteras de lo que comúnmente se considera el Estado incluyendo otras instituciones y grupos que realizan tareas políticas esenciales.

Si pedimos a una economista en activo que defina las fronteras de la empresa nos dará una respuesta hoy, y mañana, cuando esté trabajando sobre otra cuestión, una distinta; es el problema mismo el que define dónde residen las fronteras. Lo mismo resulta válido para el Estado; también sus fronteras varían en la medida en la que cambian los problemas a los que se enfrenta, y en la medida en que se transforman los medios de los que dispone. El Estado, tal y como se concibe comúnmente, continúa siendo el depositario último del poder social; no obstante, no tiene por qué estar compuesto por el mismo conjunto de instituciones en todas las sociedades, como tampoco necesita que estas instituciones sean inmutables, o estén guiadas por un único propósito. Tampoco necesitan los distintos elementos del Estado estar ubicados, ya sea funcional o conceptualmente, bajo un mismo techo. En realidad, con frecuencia existen ventajas prácticas que hacen que la clase dirigente decida organizarlos de otro modo.

Teniendo en cuenta que el gobierno electo en Japón es muy débil y que los funcionarios de alto nivel no son elegidos, el Estado japonés se ha

visto forzado a incorporar a una serie de organismos específicos con el fin de que ejecuten todas las funciones que se esperan de él. Entre los más importantes están las principales asociaciones empresariales –a menudo dirigidas por ex trabajadores de la administración– que participan en la planificación y la coordinación económica, contribuyendo a la acumulación de capital y a generar valor. (El presidente de una de ellas, Keidenren, es popularmente conocido como el primer Ministro de las empresas.) Otro es el gobierno de Estados Unidos, cuyas fuerzas armadas aún ocupan más de 150 bases militares en el archipiélago, y que continúa detentando, al estilo colonial, el derecho legal a sofocar desórdenes internos. Un tercer elemento clave es el sistema imperial, que, como veremos más adelante, juega un papel crucial en la legitimación del orden social. Otros elementos son los principales medios de comunicación, las instituciones educativas y fundaciones, las organizaciones religiosas, Rengo, el principal sindicato del país y, tal y como expondré, el crimen organizado: la *yakuza*.

No debería existir ninguna dificultad en considerar esta extraña amalgama –junto con el gobierno electo, las cortes, la policía, las fuerzas armadas y, por supuesto, la Administración– como el Estado japonés, si entendemos que este último incluye todos los organismos que efectúan tareas políticas esenciales para la clase dominante. Esto no implica negar que existan diferencias fundamentales y enfrentamientos entre varios de estos organismos (y, desde luego, dentro de cada uno de ellos); o que uno de ellos, el funcionariado, posea con diferencia una influencia mayor; o incluso que las clases subalternas puedan ocasionalmente usar esta confusión para lograr victorias menores en alguno de los cargos estatales de menor importancia. Esta amplia distribución del poder político ha provocado la denuncia de que el Estado japonés está infestado por la falta de responsabilidad; sin embargo, allí donde un Estado ha servido a su clase dirigente de un modo tan exitoso, la ausencia de un centro evidente al cual se puedan dirigir exigencias, y frente al cual se pueda ejercer presión, quizá debería ser considerada como una de sus mayores fortalezas.

## VII

Lo que se desprende más claramente de esta colección de rarezas políticas –la debilidad excepcional del gobierno electo, el funcionariado superior extraordinariamente poderoso en una relación simbiótica con la clase capitalista y la distribución de funciones políticas esenciales entre numerosos organismos aparentemente no políticos– es que el Estado japonés necesita desesperadamente de legitimación, de una razón clara y convincente que justifique por qué se debe obedecer al Estado aun si se está en desacuerdo con sus políticas. Sin esta razón, no hay poder económico ni militar que asegure a un Estado frente a la posibilidad de ser derrocado.

Bajo el feudalismo, estaba perfectamente claro que el Estado correspondía a la clase social y económica dirigente; sin embargo, ya fuera bajo una

u otra versión de la teoría del derecho divino de los soberanos, el pueblo, en términos generales, aceptaba que así debían ser las cosas. La clase capitalista dirigente disfruta de la misma relación con el Estado; no obstante, incapaz de apelar del mismo modo a la religión, le resulta mucho más difícil identificar sus intereses con el interés general. Para que el Estado sirva de un modo eficaz a los intereses de los capitalistas en estas condiciones es necesaria la apariencia de independencia y neutralidad, y ésta se logra habitualmente separando las funciones económicas de las políticas, y haciendo que éstas últimas sean realizadas por entidades no-capitalistas. Sin embargo, cuando la clase que más se beneficia del capitalismo también elabora y administra las reglas que hacen posible su beneficio (a diferencia de cuando sencillamente el Estado está fuertemente influido por los capitalistas, o sigue una lógica objetiva inherente al capital), el carácter parcial de estas reglas sobresale de un modo radical.

Tradicionalmente los capitalistas han logrado desplazar a la aristocracia feudal como clase dirigente al tiempo que su Estado aparece como independiente de todo vínculo de clase. En Japón –donde los funcionarios estatales dirigentes que son simultáneamente capitalistas toman las decisiones económicas más importantes–, este proceso es muy incompleto. Aunque esto puede contribuir a explicar la habilidad del Estado japonés para actuar de un modo tan decidido en nombre de la clase capitalista, también da cuenta de su mayor vulnerabilidad con respecto a las críticas de peso y su necesidad desmedida de una legitimación eficaz.

En Estados Unidos, las tres principales fuentes de legitimación política son la constitución, las elecciones democráticas (tal y como son) y, hasta cierto punto, el cargo de la presidencia, lugar y símbolo principal de la unidad y del poder nacionales. La mayoría de los estadounidenses aceptan el derecho de sus autoridades políticas a gobernar por el hecho de haberles elegido, tanto al aceptar la constitución como al votar, especialmente en las elecciones presidenciales<sup>11</sup>. Estas fuentes de legitimación no están a disposición del Estado japonés, donde innumerables extranjeros participaron en la redacción de la constitución que fue impuesta al país tras su derrota en la guerra, y donde las elecciones, si bien «libres» desde un punto de vista técnico, elevan al poder a un gobierno que práctica-

---

<sup>11</sup> Con respecto a esta cuestión me gustaría aclarar un malentendido que puede surgir de la comparación que establezco frecuentemente entre el sistema político japonés y el estadounidense. No creo que Estados Unidos sea *más* democrático que Japón, sino tan sólo democrático en un sentido *diferente*, o –más en sintonía con el curso de mi exposición– que goza de una *ausencia de democracia diferente*. Mientras Estados Unidos celebra elecciones en las que se cubren puestos que tienen un poder político real, Japón cuenta con varios partidos, entre los que figuran partidos anticapitalistas, que participan en el sistema como oponentes serios (mientras que republicanos y demócratas son sencillamente dos facciones del mismo partido), así como una concurrencia a las urnas más elevada. Las democracias estadounidense y japonesa, en tanto dictaduras de la clase capitalista, son igualmente parciales en el sentido de que benefician a su clase dirigente, y están igualmente implicadas en ocultar este carácter partidista. Ninguna de ellas puede considerarse moralmente superior a la otra.

mente todo el mundo sabe que cuenta con un poder muy limitado<sup>12</sup>. El Estado japonés tiene que buscar su legitimación en otro lugar; y así lo hace. En parte, el gobierno del funcionariado está legitimado por la creencia extendida de que los altos cargos de la Administración son simplemente la gente más lista que hay y que hacen lo mejor para servir al interés nacional. El éxito del Estado en ayudar a construir una economía próspera también fue, hasta que comenzó el estancamiento, un factor de legitimación. Se podría argumentar que los reflejos de la política posbélica de la democracia estadounidense, aún popular entre muchos japoneses, dota de cierta legitimidad al orden político. Los medios de comunicación, las escuelas, los grandes sindicatos y las instituciones religiosas también aportan su parte al desarrollar los sentimientos de equipo de la vida japonesa y simular que no existe problema alguno de legitimación que precise ser resuelto. Sin embargo, incluso si aceptamos los efectos acumulativos de todo esto, sigue existiendo un déficit enorme de legitimación. A continuación me referiré al sistema imperial (que es nuestro quinto punto).

## VIII

Aunque Japón es formalmente una democracia, está fundamentalmente gobernado por un pequeño grupo de personas que nadie ha elegido y cuyas decisiones benefician sobre todo a la clase de la que forman parte. En la medida en que el pueblo japonés conoce este hecho, y la mayoría lo conoce en uno u otro grado, cabría preguntar: ¿por qué lo aceptan? La respuesta habitual es que los japoneses son así, culturalmente, psicológicamente o en ambos sentidos. Sin embargo, esto supone introducir como explicación principal aquello que ha de ser explicado. ¿De dónde proviene este elemento de la cultura o de la psique japonesas? ¿Quién se beneficia de él? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo lo manipulan los que se benefician de él con el fin de solventar sus problemas más acuciantes? Sin restar un lugar a la cultura o a la psicología en la explicación final (o, deberíamos añadir, aceptando una versión particular de ellas), estas cuestiones vuelven a dirigir nuestra atención a la dimensión racional de nuestra indagación, al tipo de explicación que la gente da (o podría dar) sobre por qué se sienten inclinados a obedecer a la autoridad establecida.

Los dirigentes japoneses nunca han gobernado con el apoyo popular. Éste es el motivo por el que los *shōguns*, dirigentes militares tradicionales de Japón, mantuvieron al emperador más popular como una figura decorativa. Tras la revolución Meiji en 1868 –llevada a cabo por miem-

---

<sup>12</sup> Dados los orígenes peculiares de la constitución japonesa, no cabe duda de por qué el antiguo primer Ministro Yasuhiro Nakasone admitió que se trataba de un tema tabú (¿embarazoso?) para un amplio sector de la comunidad política y académica en Japón. *Daily Yomiuri*, Tokio, 5 de diciembre de 1994, p. 3.

bros inferiores entre los *samurai* de una única zona del país– la necesidad de legitimación fue especialmente severa. En aquel momento también resultaba importante la necesidad de unir a la nación en un frente común contra las últimas exacciones de Occidente, especialmente las de Estados Unidos. Consolidar los lazos entre el pueblo japonés y el emperador debió parecer la solución ideal a ambos problemas. Los nuevos dirigentes de Japón comenzaron por traer al emperador desde Kioto, donde estaba emplazado el gobierno, a Tokio para a continuación promulgar en su nombre todos sus decretos. Revitalizaron la en gran medida adormecida religión sintoísta, y dotaron de *status* divino a un emperador cuyo papel de «padre del pueblo» ya era popular. Tras ello, en 1873 promulgaron la doctrina de la *kokutai* («esencia nacional»), que afirmaba que el emperador encarnaba en su persona la voluntad de la nación. Así pues, sabía lo que el pueblo japonés necesitaba, lo que era bueno para él y cómo debía vivir. Las nuevas directrices políticas erigidas por el gobierno se presentaron como una ofrenda del emperador, una manifestación de su perfecta sabiduría y benevolencia, ante la cual el pueblo debía sentirse eternamente leal y agradecido.

Se ilegalizó toda crítica al *kokutai*, que pasó a ser la pieza central de la educación, tanto en las escuelas como en el ejército. Existen pocas evidencias de que el emperador hubiera sido considerado una figura de una benevolencia semejante con anterioridad a que se declarara la doctrina de la «esencia nacional», o que la gente hubiera reaccionado a su supuesta benevolencia con la misma ferviente gratitud que expresara con posterioridad. (Esto va dirigido tanto a las explicaciones culturales como a las psicológicas esencialistas acerca de la excepcionalidad japonesa.) Una vez asentado el sintoísmo de Estado y la *kokutai*, la legitimación de los auténticos dirigentes de Japón estaba asegurada por casi un siglo.

En 1945, con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, se esperaba que todo esto tocara a su fin. Bajo la dirección del general MacArthur, el emperador Hirohito anunció al pueblo japonés en su discurso de fin de año de 1946 que él no era una deidad en vida y que la guerra había sido un trágico error<sup>13</sup>. De un golpe, dos pilares del dominio del emperador sobre el pueblo japonés –su divinidad y su infalibilidad en asuntos de interés público– desaparecieron. La nueva constitución no concedía ningún papel político al emperador, y únicamente aludía a él como un «símbolo del Estado japonés y de la unidad del pueblo». Su propio papel, afirma el texto, proviene «de la voluntad del pueblo en el que descansa el poder político soberano» –aunque funcionarios anónimos lograron en la traducción japonesa hacer pasar el término «voluntad» por «integración»<sup>14</sup>–. A raíz de estos cambios, la mayoría de los estudiantes

<sup>13</sup> Desde luego, su propio papel como criminal de guerra fue cuidadosamente ignorado por el Tribunal Militar Aliado. Véase Herbert Bix, *Hirohito and the Making of Modern Japan*, Nueva York, 2000.

<sup>14</sup> Louis D. HAYES, *Introduction to Japanese Politics*, Nueva York, 1992, pp. 282-283.

japoneses politizados tras la guerra consideraron al emperador como un mero anacronismo, menos importante incluso que el monarca británico. (A diferencia de su contraparte británica, por ejemplo, el emperador no juega ningún papel a la hora de nombrar a los embajadores y no tiene derecho a consultar los documentos estatales; tampoco la legislación requiere su sello.) Considero este hecho como un grave error.

Desde mi punto de vista, el emperador sigue siendo la fuente de legitimación principal del Estado japonés. A pesar de todos los cambios formales en su *status*, continúa haciendo para el capitalismo japonés lo que la constitución y las elecciones libres no pueden hacer, y lo que otras fuentes de legitimación anteriormente mencionadas sólo pueden lograr parcialmente. El modo en el que lo hace es asimismo absolutamente único. Como cabeza preeminente y símbolo más destacado de la nación japonesa, el emperador ocupa una posición que le permite lograr que el pueblo acepte el orden político existente y sus consecuencias partidistas provocando una transferencia de sentimientos que desplazan la lealtad que el pueblo siente hacia su comunidad social (a la que pertenecen en tanto miembros de un grupo étnico), a la comunidad política, o al Estado (al que pertenecen en tanto ciudadanos y miembros de diferentes clases sociales)<sup>15</sup>. Al presentar al emperador como alguien que se sitúa a caballo entre ambas comunidades, los dirigentes japoneses esperan conjugarlas de este modo en la mente popular, practicando, de hecho, una confusión entre lo que ha constituido a los japoneses como pueblo con la forma de gobierno que se ha erigido sobre ellos; y propiciando que reaccionen ante ésta en modos evocados por la primera.

El emperador logra esta hazaña memorable no por nada de lo que dice o hace, sino simplemente en virtud de lo que es (o por lo que se le toma), y en virtud de la importancia que los japoneses conceden a su relación con él. Una vez asumida su posición al frente del Estado, el título empleado en la actualidad resulta menos importante que la naturaleza de la conexión transmitida; lo cual explica la falta de importancia relativa que se le concede en la redacción empleada en la constitución; tan sólo hace falta un pequeño cambio en el enfoque para confundir el Estado con la encarnación política de la comunidad social, los medios necesarios gracias a los que se actúa en el mundo. En este caso, la ciudadanía, que todo individuo ya posee en tanto miembro de una comunidad étnica, queda formalizada en el Estado simplemente como derechos y obligaciones<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Véase la importante distinción que Marx establece entre la *comunidad social*, en la que la división del trabajo establece una interdependencia y cooperación mutua entre todas las partes con el fin de satisfacer sus necesidades, que a su vez conduce a una fuerte identificación con otros miembros de la comunidad y a una valoración de su contribución al bienestar propio; y la *comunidad política*, en la cual una clase, en la consecución de sus propios y estrechos intereses, ejerce el poder sobre el resto. Marx denomina «comunidad ilusoria» a esta última; a diferencia de la primera, ni pertenece ni beneficia a todos por igual. Marx y Engels, *German Ideology*, cit., pp. 74-75.

<sup>16</sup> Desgraciadamente, demasiados japoneses siguen pensando que los que no son étnica-



El carácter chino que en Japón designa al «Estado» significa «padre de familia», y sugiere que el Estado es un constructo natural en lugar de artificial, en el que quien ocupa el vértice del Estado ocupa la posición del padre de familia. Para reforzar este lazo, el papel especial que juega el padre en la familia es mencionado incluso en la constitución japonesa. Desde luego, el emperador está en mejor posición que un presidente para hacer uso de esta analogía. El presidente estadounidense, por ejemplo, puede tratar de proyectar una imagen de padre; sin embargo su partidismo y temporalidad en el cargo hacen imposible que se presente como el padre de todos, o que se pretenda que todos los miembros de la familia nacional tengan la misma importancia para él. El carácter chino empleado para designar «funcionariado» pondría asimismo de manifiesto la importancia del papel legitimador del emperador. Originalmente significa «servir al emperador o al cielo», donde el emperador también incluye al pueblo. Hoy en día se supone que el funcionariado sirve a este último. La aquiescencia pública y total al gobierno del funcionariado por parte del emperador, que para algunos sigue operando como una suerte de padre (con toda la carga de justicia y benevolencia que esto conlleva) es fácilmente construida como un garantía de que los funcionarios públicos en cargos elevados están realizando un buen trabajo con el fin de servir a todo el mundo, y no sólo a unos pocos privilegiados.

Ninguna otra familia real puede remontar sus orígenes a tiempos tan remotos como la del emperador japonés. En tanto «padre» del pueblo japonés, en una relación que presumiblemente se remonta 2.000 años atrás, no necesita la aprobación constitucional para ejercer la influencia que se le atribuye en el presente. Dado que el tipo de obediencia que él impone no puede ser tomada, únicamente ofrecida, cabe incluso pensar que su falta de poder formal en realidad le ayuda en esta tarea. Cuando el antiguo rey espartano, Licurgo, quiso que su pueblo adoptara una nueva constitución, su primera iniciativa fue abdicar, de modo que sus súbditos no se sintieran constreñidos a la hora de aceptar su nueva ley. Sólo en esas condiciones, pensó, sería posible obtener su apoyo incondicional. De un modo similar, la influencia que el emperador ejerce sobre el sentimiento que el pueblo tiene acerca de sí mismo y el modo en que se relaciona con el Estado puede ser tan profunda sólo únicamente gracias al hecho de carecer por completo de los medios que aparentemente le permitirían imponer su voluntad. Desde esta posición que se sitúa por encima de la confrontación política, sin ninguna responsabilidad en relación a la legislación pública y careciendo de capacidad para ejercer sus propias opiniones (en caso de tenerlas), el emperador ha sido destilado hasta convertirse en un espíritu de pura preocupación por el bienestar del pueblo japonés.

---

mente japoneses nunca podrán alcanzar la ciudadanía plena (no hay más que pensar en la discriminación que sufren los coreanos a pesar de haber vivido en Japón durante generaciones), y que los étnicamente japoneses que se han convertido en ciudadanos de otros países son traidores a su «raza».

Esto no siempre fue así. Inmediatamente después de la guerra, el reconocimiento por parte del emperador de no ser infalible ni divino, junto con la extensión de ideas antimilitaristas, igualitarias y republicanas (especialmente en las escuelas), hizo muy difícil que éste volviera a asumir el papel que tuvo antes de la guerra como legitimador supremo del orden establecido. La turbulencia política de posguerra tuvo muchas causas; sin embargo, una que no ha recibido la atención que merece fue la incapacidad del régimen para obtener la legitimidad que precisaba sin la ayuda que tradicionalmente le proporcionara el sistema imperial. Los dirigentes de la Administración japonesa trabajaron duro para restablecer la autoridad del emperador por todos los medios posibles, dada la relación entre las distintas clases en aquel momento. El principal objetivo era hacer que el pueblo pensara nuevamente en el emperador como cabeza del Estado. Esto incluía frecuentes intentos –que contravenían la constitución– para que éste representara su papel en ocasiones ceremoniales, y presiones en las escuelas para que introdujeran en el programa una enseñanza acerca del sistema imperial más tradicional. Únicamente en este contexto podemos entender la importancia que el gobierno nominalmente democrático de Japón adjudica al hecho de que los estudiantes entonen un himno nacional que presenta al país aún bajo el dominio del emperador.

¿He dado demasiada importancia al emperador en mi explicación sobre la política japonesa? Después de todo, muchos, si no todos los japoneses dirán que el emperador les es indiferente. No obstante, esta afirmación resulta sospechosa, especialmente si la realizan a extranjeros. La mayoría de los japoneses dirán también que no creen en el sintoísmo, aunque muchos reciten las oraciones sintoístas antes de construir un edificio o una casa. La creencia religiosa puede haber disminuido en Japón, sin embargo, están vivas y gozan de buena salud todo tipo supersticiones. Aun cuando prácticamente nadie considera divino al emperador en estos días, su *status* como padre del pueblo japonés está razonablemente asentado; y dado el fuerte sentimiento de identidad étnica que aún prevalece en Japón, esto resulta más que suficiente para que ejerza su papel de supremo legitimador del Estado.

## IX

No resulta una tarea fácil restablecer una tradición irracional en un mundo cada vez más racional, especialmente cuando la gente aún se muestra muy consciente del elevado precio que pagó por secundarla en el pasado. La primera línea de defensa del régimen japonés en contra de las críticas al sistema del emperador se trata como una tremenda ofensa y, siempre que sea posible, se rechaza incluso reconocer la relevancia de dicho sistema. Recientemente se produjo una crisis de procedimiento en la Asamblea de la Prefectura de Okinawa cuando un diputado del Partido Comunista se refirió al «brutal sistema *tennō* [del emperador]» en un discurso sobre el papel de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Esto acabó en una

interrupción del funcionamiento del órgano legislativo que duró cinco días durante los cuales la mayoría conservadora intentó que este diputado enmendara la «observación insultante» y se disculpara. Él se negó y finalmente el presidente simplemente omitió las palabras ofensivas en las actas.

La segunda línea de defensa y, sin duda, la más efectiva es la represión directa. Ayuda enormemente si aquellos que optan por la crítica hacia la tradición imperial sienten temor al hacerlo. En Japón, la tarea de atemorizarlos la lleva a cabo la *yakuza*, que amenaza, golpea e incluso asesina a cualquiera que se oponga públicamente al sistema del emperador. El miembro de la *yakuza* que apuñaló al nuevo director del instituto por no izar la bandera del Sol Naciente y hacer que el himno «Que el Emperador gobierne para siempre» se cantara durante la graduación se sintió sumamente complacido al enunciar sus motivos: «Quiero que toda la gente japonesa respete la *hinomaru* y el *kimigayo*. Si matara al director, y esto fuera difundido por los medios de comunicación, serviría como una advertencia a aquellas organizaciones que se oponen a que se enarbole la bandera *hinomaru* y se entone la canción *kimigayo* en las escuelas»<sup>17</sup>. ¿Quién puede dudar de que este mensaje, y otros similares, haya surtido efecto?

No se trata de algo que pueda hacer cualquier departamento oficial del gobierno: no de un modo tan sistemático y, por lo tanto, tan eficaz; en cualquier caso, no en la medida en que el Estado pretendiera ser una democracia. La implicación del gobierno también daría la apariencia de que el emperador, en tanto supuesta cabeza del Estado, estaría de algún modo implicado en actuaciones violentas al margen de la legalidad que restarían credibilidad a su supuesta neutralidad (por no hablar de su benevolencia). Sin embargo, la *yakuza*, con su de sobra conocida concepción del honor y sus múltiples vínculos con la extrema derecha en Japón, puede llevar a cabo esta tarea de tal modo que el gobierno quede exento de responsabilidad. La enorme libertad de la que disfruta la *yakuza* para reprimir las críticas contra el emperador, y la reseñable libertad con la que ejecuta sus actividades criminales más tradicionales no serían posibles sin una aceptación activa por parte del gobierno. Desde el gobierno se defiende una concepción más funcional del papel de la *yakuza* en la sociedad japonesa de la que se ofrece habitualmente. Si tenemos en cuenta su fuerte implicación en la industria de la construcción, el gasto extraordinariamente elevado que destina el gobierno a obras públicas (en la actualidad, mayor que el del presupuesto de defensa de Estados Unidos) podría interpretarse, asimismo, como un pago parcial a la *yakuza* por los servicios prestados<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> *Japan Press Weekly*, Tokio, 12 de junio de 1999, p. 21.

<sup>18</sup> Existe, desde luego, una derecha ultranacionalista en Japón al margen de la *yakuza*, pero el solapamiento entre ambas es bastante mayor que el que se da en otros países: las *yakuzas* son sencillamente mucho más que una versión ampliada de la mafia. Para los sorprendentes datos acerca de la industria de la construcción, véase Gavan MCCORMACK, *The Emptiness of Japanese Affluence*, Armonk, NY, 1999, p. 33.

Los lazos entre la *yakuza* y el Estado se remontan a finales del siglo XIX, cuando sus miembros realizaron el trabajo duro para los políticos conservadores controlando la inquietud de los trabajadores y actuando como espías y asesinos para el gobierno (hasta el punto de asesinar a la reina de Corea en un incidente que desencadenó la guerra con dicho país en 1895). La estrecha colaboración entre la *yakuza* y los nuevos funcionarios dirigentes de Japón estuvo sin lugar a dudas propiciada por el hecho de que ambos grupos provenían de los *samurai* de baja gradación del período anterior. Su cooperación continuó a lo largo del siglo XX, durante el cual la lista de víctimas –a menudo a petición directa del gobierno– se amplió hasta incluir a comunistas y estudiantes radicales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la *yakuza* ayudó al ejército japonés en el pillaje realizado en Manchuria y China durante la ocupación, introduciendo el uso de drogas entre los chinos como una réplica de la política británica durante la década de 1840. Se suponía que una nueva era daría comienzo tras la guerra, sin embargo el papel político de la *yakuza* no parece haber disminuido. El Partido Democrático Liberal que ha dominado la política electoral desde 1945 fue en buena parte fundado con el dinero de Tsuji Karoku, que gustaba de llamarse a sí mismo como el «Al Capone de Japón»<sup>19</sup>. Kodama Yoshio, la figura más importante del PDL hasta finales de la década de 1970, también contó con conexiones de amplio alcance con la *yakuza*, al igual que varios primeros ministros y algunos de sus socios en el gobierno. En 1963, algunos caciques de la *yakuza*, bastante preocupados por las disputas entre diferentes facciones de su partido, formaron una comisión y enviaron una carta a los miembros del PDL en el Parlamento instándoles a acabar con sus riñas puesto que lo único que lograban era beneficiar a la izquierda.

Sin embargo, posiblemente nada revela mejor los estrechos lazos entre la *yakuza* y el gobierno que el discurso de Ohno Baboku, secretario general del PDL entre 1957 y 1965, dirigido a 2.500 miembros de la *yakuza* durante el nombramiento del nuevo padrino de Kobe:

Los políticos y aquellos que optan por la caballerosidad [*yakuza*] se dedican a ocupaciones diferentes, sin embargo, comparten una cosa, su devoción hacia la práctica de la *giri* [obligación] y del *minjo* [sentimiento humano]... Con este discurso de felicitación espero que ustedes se afanen en el ejercicio de la caballerosidad con el propósito de mejorar nuestra sociedad<sup>20</sup>.

Si el nuevamente revitalizado respeto hacia el emperador tiene que algo que ver con una «mayor reafirmación» de la caballerosidad de la *yakuza*, habría quedado demostrado que las felicitaciones de Ohno eran bien merecidas.

<sup>19</sup> David KAPLAN y Alec DUBRO, *Yakuza: the Explosive Account of Japan's Criminal Underworld*, Nueva York, 1986, p. 67.

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 82.

En Estados Unidos, es la casta sacerdotal de los abogados la que garantiza que la gente demuestre la deferencia adecuada hacia la constitución y la Corte Suprema. Sin esta deferencia –apoyada e instigada por una misticación semejante a la asociada con el sistema del emperador–, la constitución y la Corte Suprema no podrían cumplir su tarea de legitimación. Únicamente en este sentido se entiende que dos tercios de los abogados del mundo ejerzan sus actividades en Estados Unidos. En Japón, la *yakuza* juega un papel equivalente que, a su vez y de forma adecuada, es proporcionalmente cuatro o cinco veces mayor a la mafia estadounidense. En lo que respecta a la legitimación, los miembros de la *yakuza* equivalen a los abogados de Japón. Y en la medida en que la *yakuza* proporciona a la clase dirigente el componente importante de represión que ésta precisa, puede –de acuerdo con los criterios que he establecido– ser incluida como una parte integral del Estado japonés.

## X

La clase dominante de Japón ha logrado transferir su poder de un sistema político a otro. A excepción de un puñado de generales, en Japón no se produjo una purga durante la posguerra similar a las que tuvieron lugar en Alemania e Italia. Muchas figuras con historiales de guerra espeluznantes (aunque, desde luego, pocos igualables al del propio Hirohito) continuaron jugando papeles de liderazgo en los rangos superiores del funcionariado, el gobierno y los negocios; un criminal de guerra de primera fila se convirtió en primer ministro al término de la ocupación estadounidense. No es de extrañar que el gobierno japonés nunca haya sido capaz de pedir perdón por las numerosas atrocidades cometidas en tiempo de guerra, o que se sienta tan unido a la bandera y al himno que se emplearon en aquel período (tanto Alemania como Italia cambiaron sus símbolos nacionales)<sup>21</sup>. De modo similar, no sorprende que los dirigentes del antiguo régimen trataran de restablecer sus principios tan pronto como les fue posible. Sin embargo, ¿cómo encerrar nuevamente al genio en la botella? El tratado acordado con los ocupantes estadounidenses tras la guerra habría supuesto –oficialmente– el desplazamiento del emperador de la política, la abolición del ejército, y la democratización del proceso electoral; habría desarticulado los *zaibatsu*, proporcionado derechos a los sindicatos y acabado con los programas y rituales nacionalistas en las escuelas.

La respuesta de la clase dominante consistió en restablecer, con la indispensable colaboración de la *yakuza*, el prestigio del emperador tan pron-

---

<sup>21</sup> Tampoco el gobierno estadounidense ha pedido disculpas por las atrocidades cometidas durante la guerra con el lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y de bombas incendiarias en Tokio. Desgraciadamente, la mayoría de los que acertadamente han criticado a Japón por su estupidez moral han prestado escasa atención a la comisión de estos mismos errores por parte de Estados Unidos.

to como le fue posible. La legitimación que éste proporcionaba se empleó entonces con el fin de volver a ordenar las piezas en el tablero legado por los estadounidenses. Cuando llegara el momento, el emperador se convertiría nuevamente en el jefe del Estado (a todos los efectos a excepción del nombre y, con una nueva constitución a la vista incluso, esto podría lograrse). La «Fuerza de Autodefensa» está entre las cinco fuerzas militares más poderosas del mundo. El proceso electoral democrático ha sido esquivado gracias a que la mayor parte del poder descansa en manos de los funcionarios. Los *zaibatsu* se han cambiado el nombre por el de *keiretsu* y son tan poderosos económicamente como siempre. La mayoría de los sindicatos se han transformado en sindicatos de empresa, a menudo con directivos de las compañías como presidentes, con todo lo que esto conlleva. Y de forma gradual aunque segura, las escuelas se han visto obligadas a adoptar un currículum con una orientación más nacionalista, con todos los rituales y símbolos que normalmente la acompañan. Sin embargo, dado el abatimiento actual de la economía, y el incremento de la insatisfacción causado por el empeoramiento de las condiciones de vida, la necesidad que tiene el Estado de legitimar su propuesta capitalista es mayor que nunca. Esto explica la intensificación de los esfuerzos por parte del gobierno para reforzar el prestigio del emperador en las escuelas y entre el pueblo en general, y la reacción que esto ha provocado entre aquellos que temen con razón las consecuencias que esto pueda acarrear<sup>22</sup>.

Otra salva a las «guerras del emperador» fue lanzada por el primer Ministro Mori Yoshiro el 15 de mayo del 2000 cuando anunció en una reunión de la Asociación de Santuarios Sintoístas: «Japón es un país de *kami* [dioses] con el *tennō* [emperador] en el centro». Ésta es la organización que ha estado intentando que todos los ministros del gobierno realizaran visitas oficiales al santuario sintoísta, emplazamiento en el que han sido enterrados numerosos criminales de guerra. El brote nacionalista de Mori, en calidad de primer ministro, fue un primer paso. Los partidos de izquierda de la oposición exigieron inmediatamente que se retractara y pidiera disculpas. No lograron ninguna de las dos cosas. Otro signo de lo que se avecina en la política japonesa fue la introducción por primera vez en un manifiesto electoral del PDL, en junio del 2000, de una demanda de revisar la constitución japonesa. Aunque el PDL no especificó reformas concretas, nadie duda que uno de los cambios fundamentales habría de consistir en hacer que el emperador se convirtiera en jefe oficial del Estado; esto serviría como un trampolín para difundir propaganda nacionalista de todo tipo. La batalla en torno al sistema del emperador se prevé que ocupará un lugar central en la vida política japonesa.

Los funcionarios que negociaron los términos de la rendición al finalizar la Segunda Guerra Mundial sabían claramente lo que hacían cuando se

---

<sup>22</sup> Véase Gavan McCOMACK, «Japan's Houdini», NLR 7 (enero-febrero de 2001).

negaron tajantemente a permitir que el emperador fuera juzgado como criminal de guerra e insistieron en su permanencia en el trono, aun privado de toda autoridad constitucional. Si se conserva una mayonesa que no ha alcanzado el punto adecuado de densidad, se puede trabajar con una cantidad más pequeña hasta que ésta cuaje. Una vez cuajada, se añade de forma gradual el resto de la mezcla hasta que toda la mayonesa haya adquirido el estado deseado. Los funcionarios sabían que el emperador, y únicamente el emperador, podía jugar la parte del papel de redención que reconstituiría a la sociedad japonesa, y han procedido como correspondía.

## XI

Si la legitimación ocupa la posición central en la sociedad japonesa que he indicado, entonces la política de deslegitimación debería jugar un papel mucho más crucial del que ha jugado hasta ahora. En lo fundamental, deslegitimar al Estado consiste en aclarar con contundencia que éste está dirigido por y en beneficio de una sola clase; que nos hallamos ante una dictadura de clase, y que cualquier cosa que esta clase haga o diga va encaminada a ocultar este hecho o, de modo ocasional, a alcanzar un compromiso que se imponga *in extremis* sobre alguno de sus órganos. La deslegitimación se desarrolla generalmente por dos medios. En el primero, las acciones del Estado se hacen tan transparentes y tan dañinas para otras clases que lo que ha de ser ocultado y racionalizado simplemente supera los medios que han sido empleados a tal efecto. Las crisis económicas y políticas proporcionan numerosos ejemplos de este hecho. En el segundo caso, las instituciones que sirven como fuentes principales de legitimación pierden su capacidad de llevar a cabo dicho papel.

En el caso de Japón, los radicales dentro y fuera del Partido Comunista se han mostrado muy activos a la hora de desenmascarar los sesgos de clase del Estado capitalista. Por otro lado, se ha prestado una atención relativamente escasa a restar autoridad a las fuerzas que legitiman a dicho Estado –el sistema del emperador a la cabeza– a los ojos del pueblo en general. No cabe duda de que las causas de ello son múltiples y complejas, y el temor a las represalias de la *yakuza* figura de manera prominente entre ellas. Aún así, a partir del análisis desarrollado en estas páginas, se debería dar mayor prioridad, de la que se da en estos momentos, a la crítica de todas las fuentes de legitimación, y en particular al sistema del emperador. Los prolongados y meticulosos esfuerzos que el Estado ha dedicado a reconstruir el sistema del emperador ponen de manifiesto no sólo su importancia para la clase dirigente, sino también la fragilidad de esta autoridad legitimadora, que aún no ha sido eficazmente explotada como debería. Con la economía japonesa seriamente abatida y un proceso de empeoramiento casi seguro –con desempleo (del 4,7 por 100 a escala nacional, pero del 25,5 por 100 entre los que han logrado recién-

temente un título universitario), quiebras (las deudas provenientes de compañías quebradas alcanzaron un máximo histórico respecto a todo el período de posguerra en julio de 2000), suicidios de trabajadores, muchos de ellos a causa de la pérdida del puesto de trabajo (30.000 en 1998) y muerte por exceso de trabajo (un fenómeno tan significativo que los japoneses tienen una palabra especial, *karoshi*, para referirse a ello) en aumento-, la dependencia de los capitalistas con respecto a la contribución única del emperador para mantener el *statu quo* nunca ha sido tan grande. El peligro reside en el hecho de que una vez que el pueblo se da cuenta de que ha sido engañado y manipulado repetidamente, nada impedirá que muchas personas se vuelvan contra los que hace no mucho veneraban. Sin la legitimación que proporciona el sistema del emperador, Japan Inc. podría desmadejarse a gran velocidad.

Si bien no me encuentro en posición de ofrecer un conjunto exhaustivo de tácticas para llevar a cabo dicha política, no puedo dejar de advertir que el vínculo entre el emperador y la *yakuza* lo único que hace es facilitar los propósitos de legitimación, si se mantiene de forma implícita y es considerado como algo casual, como el resultado de una vena patriótica irracional de estos criminales, y no es reconocido como un requisito orgánico dictado por las funciones estatales esenciales. Sin embargo, una vez explicitado este vínculo y comprendido su carácter de necesidad, lo que anteriormente era una ventaja para el sistema rápidamente se convierte en un gran obstáculo. De acuerdo con la imagen neoconfuciana del emperador sabio y benevolente no caben confabulaciones con el crimen organizado. Por lo tanto, la pregunta que los radicales japoneses deberían instar a todo el mundo a formular es la siguiente: ¿por qué el Estado emplea la *yakuza* para aplastar todas las críticas hacia el emperador? O, de un modo más incisivo: ¿por qué necesita el emperador la *yakuza*? El esfuerzo por contestar esta pregunta haría que la gente avanzara un gran trecho hacia la deslegitimación del Estado capitalista en Japón.

El principal debate entre los marxistas japoneses durante la primera mitad del siglo xx giró alrededor de la naturaleza de la sociedad japonesa: ¿era feudal o capitalista? Mucho estaba en juego dependiendo de la respuesta, incluido el tipo de revolución (capitalista-democrática o socialista) a propugnar. El hecho de que el Estado japonés aún emplee una institución feudal tradicional para obtener una proporción tan grande de su legitimidad puede sugerir a algunos que este viejo debate está por resolver. Mi postura es que Japón es claramente una sociedad capitalista, que su Estado es capitalista, aunque por razones históricas peculiares sea capaz de emplear una formación fundamentalmente precapitalista para cumplir una de sus funciones esenciales. La revolución que Japón necesita no es de carácter democrático-burgués, sino socialista; sin embargo, luchar por la reforma democrática del sistema del emperador podría ser un paso importante en esta dirección.